

WASHINGTON, 18 de marzo. — La situación actual en Argentina no es menos inestable ni menos explosiva que la que prevalecía en Irán antes de que el aparentemente inexpugnable régimen del cha y de sus poderosas fuerzas armadas fuera derrocado por la insurrección masiva de la población.

El 24 de marzo de 1976, aquellos que dentro del gobierno y el sector privado empresarial de Estados Unidos se ocupaban de las relaciones políticas, económicas y militares con Argentina dieron un suspiro de alivio cuando los militares, encabezados por el general Jorge Rafael Videla y con notable eficiencia, depositaron al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

Los medios de comunicación estadounidenses se ocuparon de proyectar imágenes de soldados argentinos con palomas blancas posadas sobre sus metralletas sonriendo y calmando a los civiles que ahora pasaban a estar bajo su paternal protección. La gran prensa de Washington caracterizó al nuevo presidente como hombre sacrificado, cristiano devoto, políticamente moderado, carente de ambiciones personales y altamente capacitado para restablecer la paz y la estabilidad en su país.

El nombramiento de José Martínez de Hoz, terrateniente conservador, gerente de multinacionales y conocido banquero, como ministro de Economía, obtuvo la inmediata aprobación de los financieros estadounidenses y eurooccidentales que cargaban en sus portafolios la mayoría de la deuda externa argentina de diez mil millones de dólares.

Hoy pocos estarían en desacuerdo con la afirmación de que la violencia política y el caos económico de los últimos tres años han excedido las proyecciones más pesimistas. El grado de desarticulación social no tiene precedentes en la historia civil y militar reciente de la nación, y apenas si puede compararse con algunos momentos críticos de la historia de América Latina. Un país que había sido respetado en muchos ámbitos y ocasiones por su actitud firme e independiente en sus relaciones internacionales y por su poderío económico se ha unido hoy a Chile, Sudáfrica, Nicaragua, Uganda y otros parias del concierto de naciones.

Las autoridades argentinas, con el argumento de que no podían arriesgarse a que los guerrilleros liberales se reincorporasen a la lucha contra el gobierno, y temiendo que los testimonios de las víctimas de la tortura que fueran deportadas alentaran la condena internacional, decidieron ignorar las presiones de la opinión pública mundial. Pero a pesar del deterioro que esta actitud produjo en la imagen internacional del régimen, la mayoría de los militares siguen convencidos de que la "guerra sucia contra la subversión" ha dado buenos resultados. Dicen haber liquidado al 85 por ciento de las fuerzas guerrilleras, que en 1975 pronosticaban confiadamente una

En Argentina: "guerra sucia" contra la subversión

Gino Lofredo

victoria revolucionaria antes del fin de la década. Sin embargo, la intensidad de la represión no ha disminuido.

La economía argentina sigue hundida en la recesión más profunda que haya sufrido desde los años treinta. Su Producto Interno Bruto (PIB) se redujo en 1978 en un 4.1 por ciento, y llegó a un nivel por debajo del alcanzado en 1973. Mientras que el costo de la vida supera actualmente el de Estados Unidos, los salarios reales han sido reducidos en un 60 por ciento desde 1975 y hoy constituyen apenas un tercio del salario equivalente de un obrero estadounidense. El ritmo inflacionario en 1978 fue nuevamente el más alto del mundo, de un 169.8 por ciento. Solamente en el mes de enero de 1979 el costo de la comida aumentó en un 15.5 por ciento mientras que las pautas gubernamentales que regulan los aumentos salariales permiten solamente un aumento del cuatro por ciento mensual. La drástica reducción del mercado interno de consumo ha producido una baja alarmante en los niveles de producción en la industria y el comercio llevando a un nivel record el número de quiebras declaradas desde 1976 hasta el presente. El resultado ha sido una violenta redistribución regresiva del ingreso de los sectores laborales y empresariales en favor del sector financiero y las empresas extranjeras. La reducción del consumo doméstico y de la producción industrial ha causado una reducción de las importaciones y una expansión relativa de las exportaciones agrícolas y ganaderas, provocando una acumulación de 6 mil millones de dólares en reservas de divisas que irónicamente el gobierno cita como prueba de éxito de su política y de la fortaleza de la economía nacional.

Cuando el impacto social de la política económica gubernamental se suma al odio y la ansiedad que ha producido la represión política, se hace evidente por qué tantos ex simpatizantes del régimen militar han comenzado a temer que la indispuesta victoria militar sobre las organizaciones "subversivas" se transforme en una derrota política que prepare el camino para un resurgimiento de movilizaciones de masas y violencia social.

En este contexto no es sorprendente que a pesar de la intervención militar de los sindicatos y la prohibición explícita de toda actividad organizativa en el campo laboral, hayan habido cientos de huelgas y otras acciones fabriles en el último año, involucrando a cientos de miles de trabajadores en todo

el país. Los militares siguen firmes en su compromiso de restringir permanentemente los límites de la actividad sindical a través de la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, que entre otras prohibiciones eliminaría las federaciones y confederaciones sindicales a nivel provincial y nacional. La nueva ley impediría la identificación y el apoyo sindical a cualquier partido político, apuntando claramente al rompimiento de los vínculos tradicionales entre el sindicalismo y el movimiento peronista. La nueva ley provocaría también el desmantelamiento legal de la Confederación General del Trabajo (CGT), que durante casi medio siglo sirvió de organismo unificador del movimiento obrero argentino. Los dirigentes sindicales, apoyados por sus bases obreras en su lucha por la supervivencia, han logrado acuerdos importantes con alianzas tácticas con empresarios de la industria y el comercio firmemente opuestos a la política económica del gobierno. Partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica y algunos oficiales de las fuerzas armadas desalentados por el curso del proceso político gravitan actualmente hacia esa amplia y potencialmente poderosa coalición cuya concreción ya tiene varios precedentes históricos en los últimos 30 años.

Las manifestaciones de esta creciente corriente antigubernamental son visibles en todos los aspectos de la vida nacional, aunque los observadores extranjeros que reportan sobre Argentina a menudo las ignoren. A fines de septiembre pasado, por ejemplo, casi un millón de personas participaron en la tradicional peregrinación al altar de la virgen de Luján, en las afueras de Buenos Aires. El contenido de la caminata de 50 kilómetros se volvió eminentemente político: por la justicia social para los pobres y los desposeídos, contra la guerra con Chile, y por el respeto a los derechos humanos. Los críticos del gobierno, que han sido tan a menudo reprimidos y censurados, se ven forzados a utilizar un lenguaje cauteloso en sus declaraciones públicas. Sin embargo, leyendo entre líneas, los argentinos miden hasta que punto empresarios, políticos, sindicalistas y hasta oficiales de las fuerzas armadas reconocen y expresan sus frustraciones y necesidades. En diciembre pasado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la mayor organización activa en defensa de las víctimas de la represión, presentó al general Videla un pedido de información sobre 4 mil 881 personas desaparecidas. Todos los principales partidos políticos estuvieron representados entre los firmantes de la petición.

Acciones laborales, manifestaciones pacíficas, declaraciones públicas, peticiones, misas, constituyen solamente la punta visible de un témpano cuya base se haya en el amplio movimiento antidictatorial que raramente recibe la atención del observador extranjero y que sigue siendo ignorado por los que detentan el poder político.